Cuaderno VI



MALVINAS
va a la **Escuela**

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

Observatorio de Memoria,
Investigación y Soberanía

MALVINAS, ATLÁNTICO SUR Y ANTÁRTIDA

RES. N° 4937/2025



UNR Universidad Nacional de Rosario

Plataforma Malvinas

Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Agencia de Innovación

Director
Juan Facundo Besson

Integrantes
María Salomón
Gonzalo Pellegrini
Camila Barrera
Sebastián Melano
Ernesto Dufour
Joaquín Pereyra
Juliana Krenz
Celina Tornimbeni

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

Malvinas
va a al Escuela

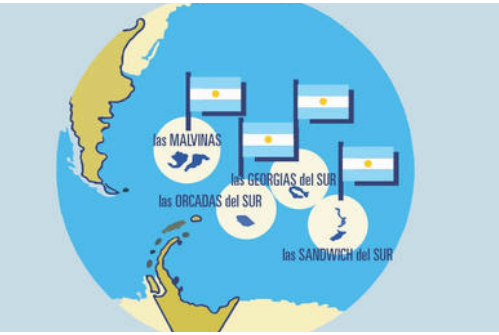
Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

"Ningún pueblo defiende aquello que desconoce. Ninguna generación transmite aquello que no comprende."



Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

SOBRE EL OBSERVATORIO



El Observatorio de Memoria, Investigación y Soberanía "Malvinas, Atlántico Sur y Antártida" de la Universidad Nacional de Rosario fue creado mediante la Resolución Rectoral N.º 4937/2025 con la finalidad de constituirse en un espacio permanente de producción científica, formación académica, preservación de la memoria y vinculación institucional en torno a la Cuestión Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida. Desde su creación, el Observatorio ha asumido una concepción de la universidad pública que trasciende la mera generación de conocimiento especializado, entendiendo que la investigación adquiere su verdadero sentido cuando dialoga con la comunidad y contribuye a la formulación de políticas públicas orientadas a la defensa de la soberanía nacional.

Esta perspectiva se traduce en una intensa actividad académica y de extensión. El Observatorio impulsa proyectos de investigación interdisciplinarios; desarrolla cursos de formación universitaria y de actualización profesional; organiza seminarios, jornadas, conversatorios y ciclos de conferencias; participa en redes nacionales de investigación; produce publicaciones científicas y materiales pedagógicos; promueve la difusión del conocimiento mediante plataformas digitales y medios audiovisuales; y articula acciones con universidades, centros de investigación, organismos públicos, colegios profesionales y organizaciones de veteranos de guerra. Su integración al proyecto federal "Voces de Malvinas", destinado a preservar los testimonios orales de los combatientes de 1982 como patrimonio documental de la Nación, constituye una de sus iniciativas más relevantes en materia de memoria histórica.

A ello se suma una labor permanente en el campo educativo. El Observatorio concibe la enseñanza de la Cuestión Malvinas como una política de Estado fundada en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, la Ley de Educación Nacional y las normas que incorporan el mapa bicontinental

argentino como contenido obligatorio. En consecuencia, desarrolla propuestas destinadas a docentes, estudiantes y público en general, procurando que la soberanía deje de ser un tema exclusivamente universitario para convertirse en un saber socialmente compartido. La elaboración de recursos didácticos, la capacitación docente, la organización de cursos abiertos y la construcción de redes federales de cooperación reflejan esta vocación por democratizar el conocimiento y fortalecer una conciencia soberana desde una perspectiva crítica, interdisciplinaria y latinoamericana.

La actividad del Observatorio también se proyecta sobre el plano institucional mediante una intensa política de cooperación con universidades nacionales, organismos estatales, centros de veteranos de guerra, instituciones educativas y organizaciones de la comunidad. Esta metodología responde a la convicción de que la soberanía constituye una construcción colectiva que requiere la articulación permanente entre el conocimiento científico, la memoria histórica y la participación ciudadana. Desde esta perspectiva, la universidad pública deja de ser un ámbito exclusivamente destinado a la producción académica para convertirse en un actor comprometido con la realidad nacional, capaz de generar conocimiento útil para la sociedad e incidir en la formulación de políticas públicas vinculadas con la memoria, la educación y la soberanía.

Este compromiso encuentra un sólido fundamento jurídico en el ordenamiento argentino. En primer lugar, la Ley de Educación Nacional N.º 26.206 establece que forman parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones "la causa de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, de acuerdo con lo prescripto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional", incorporando así la Cuestión Malvinas como una política educativa permanente y no como un contenido meramente conmemorativo. A su vez, la Ley N.º 26.651 dispone la utilización obligatoria del Mapa Bicontinental de la República Argentina en todos los niveles y modalidades del sistema educativo y ordena su exhibición en los organismos públicos, consolidando una representación cartográfica acorde con la verdadera dimensión territorial del país. En igual sentido, la Constitución de la Provincia de Santa Fe, reformada en 2025, establece en su artículo 4 la irrenunciable soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, los espacios marítimos correspondientes, la Antártida y la plataforma continental, imponiendo además al Estado provincial la promoción de políticas educativas orientadas al ejercicio de la memoria activa. Sobre estos pilares normativos se asienta buena parte del trabajo institucional desarrollado por el Observatorio.

Dentro de esa estrategia de vinculación reviste especial importancia el trabajo conjunto desarrollado con AMSAFE Rosario, delegación de la Asociación del Magisterio de Santa Fe e integrante de CTERA. Esta articulación trasciende ampliamente una cooperación institucional circunstancial, pues expresa una concepción profundamente arraigada en la tradición nacional: la necesidad de que la universidad pública dialogue con las organizaciones libres del pueblo,

entendidas como aquellos cuerpos intermedios que canalizan la participación de la comunidad y fortalecen la vida democrática. En esta perspectiva, la producción del conocimiento no se agota en el ámbito universitario, sino que adquiere sentido cuando es apropiada por quienes diariamente intervienen en la formación de las nuevas generaciones.

El curso "Malvinas va a la escuela", organizado conjuntamente por el Observatorio y AMSAFE, constituye una manifestación concreta de ese modelo de articulación. Su finalidad consiste en brindar a docentes de todos los niveles herramientas históricas, jurídicas, geopolíticas, económicas, simbólicas y pedagógicas que permitan incorporar la Cuestión Malvinas al proceso de enseñanza conforme a los mandatos establecidos por la Ley de Educación Nacional, la Ley del Mapa Bicontinental y el artículo 4 de la Constitución santafesina. De este modo, la formación docente deja de circunscribirse a la transmisión de contenidos para transformarse en una verdadera política pública de construcción de ciudadanía, orientada a fortalecer una comprensión crítica de la soberanía nacional y de la proyección argentina sobre el Atlántico Sur y la Antártida.

La vinculación con AMSAFE posee, además, un profundo significado institucional y pedagógico. El magisterio organizado constituye uno de los principales actores de la educación pública argentina y un vehículo privilegiado para que el conocimiento producido en la universidad llegue efectivamente a las aulas y a las nuevas generaciones. En esa convergencia entre investigación, extensión universitaria y formación docente se expresa una concepción de la universidad comprometida con el interés público, capaz de poner su producción científica al servicio de la comunidad organizada y de contribuir al fortalecimiento de la conciencia nacional.

En consecuencia, la cooperación entre el Observatorio y AMSAFE no sólo permite dar cumplimiento efectivo a los mandatos establecidos por la legislación nacional y provincial en materia de enseñanza de la Cuestión Malvinas, utilización del mapa bicontinental y promoción de una memoria activa, sino que también reafirma el papel de la universidad pública como institución al servicio del pueblo. La defensa de la soberanía no depende exclusivamente de la acción diplomática, del derecho internacional o de las decisiones estatales; requiere también una ciudadanía formada en el conocimiento de su historia, de su territorio y de sus derechos. Allí radica el sentido más profundo del Observatorio: contribuir, desde la investigación, la educación y el trabajo conjunto con las organizaciones libres del pueblo, a consolidar una cultura de la soberanía que trascienda las coyunturas y se proyecte como una auténtica política de Estado.

Juan Facundo Besson
Director



1982. CONFLICTO Y POSGUERRA

Introducción

El conflicto bélico del Atlántico Sur de 1982 constituye uno de los acontecimientos más complejos, dolorosos y decisivos de la historia argentina contemporánea. Su estudio presenta una dificultad particular: alrededor de aquellos setenta y cuatro días se acumularon, desde el momento mismo de los acontecimientos, interpretaciones políticas, memorias personales, discursos oficiales, relatos periodísticos, investigaciones académicas, testimonios de combatientes y construcciones culturales que no siempre resultan compatibles entre sí. El conflicto bélico fue, simultáneamente, un enfrentamiento militar entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y sus aliados de la OTAN; una fase excepcionalmente violenta de una controversia de soberanía que llevaba casi un siglo y medio; un episodio de la Guerra Fría; un acontecimiento que aceleró la descomposición de la última dictadura argentina; una experiencia vital extrema para decenas de miles de combatientes y sus familias; y el punto de partida de una extensa posguerra cuyas consecuencias continúan proyectándose sobre la política exterior, la defensa nacional, la educación, la memoria pública y la posición argentina en el Atlántico Sur.

El conflicto armado abierto comenzó el 2 de abril de 1982 con la recuperación argentina de las Islas Malvinas y las operaciones militares principales finalizaron el 14 de junio, pero su escalada inmediata debe retrotraerse a los acontecimientos ocurridos en las Islas Georgias del Sur durante marzo. El episodio tuvo como protagonista inicial al empresario argentino Constantino Davidoff, quien había adquirido en 1979 instalaciones pertenecientes a la antigua compañía ballenera Christian Salvesen en Puerto Leith con el objeto de desmontarlas y trasladar sus materiales al continente. El 19 de marzo de 1982 desembarcó allí un grupo de trabajadores argentinos transportados por el ARA Bahía Buen Suceso. La presencia argentina provocó una controversia con las autoridades británicas por el cumplimiento de las formalidades migratorias y aduaneras y adquirió rápidamente una dimensión política

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

cuando se informó sobre el izamiento de una bandera argentina. Londres ordenó al HMS Endurance, que se encontraba en la región y transportaba Royal Marines, dirigirse hacia Georgias del Sur; Buenos Aires, por su parte, dispuso medidas destinadas a impedir que los trabajadores fueran desalojados por la fuerza y posteriormente envió al ARA Bahía Paraíso, que llevaba a bordo al Grupo Alfa de la Armada. De este modo, un incidente inicialmente vinculado con una operación comercial de desguace quedó incorporado a la crisis diplomática y militar que se estaba desarrollando entre ambos Estados.

Los acontecimientos de Georgias no pueden analizarse aisladamente del deterioro de las negociaciones bilaterales. A comienzos de 1982 la Argentina había propuesto constituir una comisión permanente que se reuniera mensualmente durante un año para procurar una solución de la disputa de soberanía; en febrero se celebraron conversaciones en Nueva York, pero no se alcanzó el avance esperado y, a comienzos de marzo, el gobierno argentino hizo pública su frustración por la falta de resultados. La crisis de Puerto Leith introdujo entonces un elemento militar en un escenario diplomático ya deteriorado: el desplazamiento del Endurance, la permanencia de los trabajadores argentinos, el movimiento de unidades navales y la presencia de personal militar argentino hicieron de las Georgias del Sur uno de los principales antecedentes inmediatos del 2 de abril. Por ello, resulta más preciso distinguir entre la crisis del Atlántico Sur, cuya fase decisiva comenzó en marzo con los acontecimientos de Georgias, y la guerra abierta, iniciada el 2 de abril con la Operación Rosario y extendida, en sus operaciones principales, hasta el 14 de junio.

La Cuestión Malvinas, en cambio, posee una temporalidad completamente diferente. Comprende una controversia territorial mucho más antigua, originada en la ocupación británica de las Islas Malvinas en 1833 y posteriormente reconocida por las Naciones Unidas como una situación colonial que involucra una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Isla San Pedro (Georgias del Sur) y Esquivel (Sandwich del Sur) y los espacios marítimos circundantes. Confundir esos planos conduce a identificar una reivindicación territorial de larga duración con el gobierno que decidió recurrir a la fuerza en 1982. La última dictadura no creó la Cuestión

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

Malvinas y su derrota militar tampoco la extinguió. El propio desarrollo posterior de las Naciones Unidas permite comprobarlo: el 4 de noviembre de 1982, apenas cinco meses después del final de los combates, la Asamblea General aprobó la Resolución 37/9, que recordó las resoluciones anteriores y solicitó a la Argentina y al Reino Unido reanudar las negociaciones con el objeto de alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía. La guerra fue, por consiguiente, un episodio excepcional y trágico dentro de una controversia histórica que la precedía largamente y que continuó jurídicamente abierta después de 1982.

Una segunda distinción resulta igualmente importante. La legitimidad histórica y jurídica de una reivindicación territorial y la valoración de la decisión de recurrir a la fuerza son problemas diferentes. Es posible estudiar críticamente la decisión adoptada en 1982 por la Junta Militar encabezada por Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo sin identificar aquella conducción con la totalidad de la causa nacional. También es posible reconocer el desempeño de combatientes y unidades argentinas sin convertir ese reconocimiento en una reivindicación de la dictadura. El Informe Final de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades en el Conflicto del Atlántico Sur (CAERCAS), conocido como Informe Rattenbach, resulta particularmente valioso porque permite diferenciar distintos niveles de responsabilidad: conducción política, estrategia militar, planeamiento operacional, logística, inteligencia, actuación de los mandos y comportamiento de las unidades.

Una tercera dificultad se encuentra en la enorme cantidad de representaciones construidas durante la posguerra. La guerra fue presentada alternativamente como una aventura irracional sin ningún contexto internacional, como una conspiración completamente predeterminada por potencias extranjeras, como una demostración uniforme de incompetencia argentina o como una sucesión exclusivamente heroica de combates. Los soldados fueron definidos como “chicos”, “víctimas”, “héroes”, “excombatientes” o “veteranos”, términos que expresan diferentes maneras de comprender aquella experiencia. Para trabajar en el aula resulta necesario evitar esas explicaciones monocausales. Una guerra moderna constituye una

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

interacción estratégica en la que intervienen política, diplomacia, inteligencia, logística, tecnología, geografía, alianzas, economía, capacidad industrial, preparación militar, conducción y moral de combate.

Mariano César Bartolomé ofrece una herramienta especialmente útil al diferenciar las explicaciones endógenas de las exógenas. Las primeras buscan las causas fundamentales en la situación política interna argentina y, particularmente, en la crisis de la dictadura. Las segundas incorporan el sistema internacional, la Guerra Fría, la relación angloestadounidense, las comunicaciones marítimas y el valor estratégico del Atlántico Sur. Bartolomé cuestiona que un conflicto entre dos Estados pueda ser explicado exclusivamente mediante las necesidades domésticas de uno de ellos. Su hipótesis de una "guerra fabricada" es una interpretación que requiere ser discutida y contrastada documentalmente, no una conclusión incontrovertida; su aporte más sólido consiste en obligar a ampliar la escala de observación.

Virginia Gamba, primero en *El peón de la reina* y después junto con Lawrence Freedman en *Signals of War*, estudia el conflicto desde otro ángulo: las señales que emiten los gobiernos y la forma en que son interpretadas por sus adversarios. Rubén Oscar Moro reconstruye el proceso estratégico y militar atendiendo a la distancia existente entre el objetivo inicialmente concebido por la conducción argentina y la guerra que efectivamente se produjo. Jorge Sáenz, por su parte, presta particular atención a las percepciones argentinas respecto de Estados Unidos y al convencimiento existente en sectores de la conducción militar de que Washington impediría o moderaría una reacción británica. Las diferencias entre estos autores son importantes, pero sus trabajos permiten comprender una cuestión común: los Estados no deciden únicamente en función de lo que saben, sino también de lo que creen saber acerca de las intenciones del adversario.

Este cuaderno propone estudiar el conflicto desde esa complejidad. No pretende proporcionar al docente una narración destinada a ser repetida mecánicamente, sino herramientas para formular problemas: por qué se llegó a las armas después de diecisiete años de negociaciones; qué importancia tuvieron Georgias del Sur, la política británica, la crisis argentina y la Guerra Fría; cómo se desarrollaron las operaciones; qué

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

ocurrió en las Naciones Unidas y en las negociaciones de paz; cuáles fueron los errores señalados por Rattenbach; qué dijeron Franks y Kershaw; qué denuncias existen sobre posibles violaciones del derecho internacional humanitario; qué afirmaciones de la posguerra deben ser revisadas; cómo se organizaron los veteranos; qué significó la desmalvinización; y de qué manera los acuerdos de Madrid reorganizaron la relación bilateral después de la derrota.

La pregunta que recorre el texto es, por ello, más amplia que la pregunta acerca de quién ganó o perdió un conflicto bélico. Se trata de comprender qué ocurrió con la capacidad argentina de ejercer soberanía antes, durante y después de 1982. Vista desde esa perspectiva, Malvinas permite enseñar simultáneamente historia, geografía, derecho internacional, política exterior, defensa, economía, memoria y ciudadanía. El mapa deja entonces de ser una imagen ceremonial: se transforma en el espacio concreto sobre el cual interactúan poder, territorio, recursos, población, instituciones y proyectos nacionales.

I. Las causas del Conflicto Bélico del Atlántico Sur

Desde 1965 hasta comienzos de la década de 1980 existió un proceso diplomático real, complejo y discontinuo. Londres no sostuvo durante todo ese período una negativa absoluta a discutir la soberanía. Hubo momentos en los cuales el propio Gobierno británico estudió fórmulas que podían conducir a una transferencia de soberanía, siempre condicionadas por la situación y los intereses de los habitantes de las islas. El proyecto de Memorándum de Entendimiento de 1968 constituye el ejemplo más conocido, pero posteriormente también se consideraron fórmulas de *leaseback* o retroarriendo: reconocimiento o transferencia de soberanía a la Argentina acompañado por un arrendamiento de las islas al Reino Unido durante un período determinado. El debate parlamentario británico posterior a la guerra reconoció que gobiernos de distinto signo habían considerado esas posibilidades. En enero de 1983, el ex primer ministro James Callaghan recordó en la Cámara de los Comunes que distintos gobiernos habían estado dispuestos a contemplar la transferencia de soberanía mediante una fórmula de *leaseback*.

La Declaración Conjunta sobre Comunicaciones de 1971 representó, entretanto, uno de los mayores avances prácticos. La Argentina

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

estableció conexiones aéreas, facilitó comunicaciones y desarrolló servicios que acercaron las islas al territorio continental. La cooperación demostraba que la controversia podía administrarse mediante mecanismos pacíficos. Sin embargo, contenía una contradicción que se volvió cada vez más importante: mientras crecían los vínculos funcionales, no se producía un avance equivalente en la cuestión de fondo. Para Buenos Aires, las comunicaciones debían constituir un camino hacia una negociación efectiva de soberanía; para los sectores británicos e isleños más resistentes a cualquier transferencia, podían transformarse en un modo de estabilizar indefinidamente la situación existente. Esa diferencia de expectativas alimentó progresivamente la frustración argentina.

Durante la primera mitad de la década de 1970 apareció un factor que modificó progresivamente la valoración económica del Atlántico Sudoccidental: el conocimiento más preciso de sus posibilidades hidrocarburíferas. En 1973, el *Foreign and Commonwealth Office* encargó a un equipo del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Birmingham, dirigido por el profesor Donald H. Griffiths e integrado también por P. F. Barker, J. Burrell y P. Simpson, un estudio sobre la geología de la plataforma continental circundante a las islas. El trabajo, titulado *Geology of the Region around the Falkland Islands*, fue concluido en marzo de 1975 y examinó, a partir de la información geológica y geofísica disponible, la existencia de cuencas sedimentarias y estructuras potencialmente favorables para la presencia de hidrocarburos. Conviene precisar su alcance: el Informe Griffiths no comprobó la existencia de grandes reservas petroleras comercialmente explotables, sino que identificó perspectivas suficientemente significativas para justificar nuevas investigaciones. El estudio adquirió particular relevancia en el contexto internacional posterior a la crisis petrolera de 1973 y despertó el interés de compañías privadas por las posibilidades de exploración de la plataforma continental. El propio Gobierno británico confirmó posteriormente ante la Cámara de los Comunes que el estudio había sido encargado por el *Foreign and Commonwealth Office*.

La cuestión adquirió inmediatamente una dimensión política y diplomática. El 18 de marzo de 1975, el Gobierno británico confirmó haber

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

recibido el estudio de Griffiths y, al día siguiente, 19 de marzo, la Argentina formuló públicamente una reserva frente a cualquier exploración o explotación unilateral de los recursos naturales de los territorios y espacios sometidos a la disputa de soberanía. Londres, sin embargo, no descartaba entonces la posibilidad de incorporar los hidrocarburos a un esquema de cooperación bilateral. El 14 de enero de 1976, el ministro de Estado del *Foreign and Commonwealth Office*, Edward Rowlands, informó a la Cámara de los Comunes que durante sus conversaciones con las autoridades argentinas había propuesto discutir formas de cooperación económica en el Atlántico Sudoccidental y que había puesto a disposición del Gobierno argentino una copia del estudio de Griffiths sobre las perspectivas hidrocarburíferas regionales. El dato resulta significativo porque demuestra que, antes de la guerra, los recursos del subsuelo marítimo ya formaban parte de las conversaciones entre ambos gobiernos y se entrelazaban con la controversia de soberanía.

Sobre ese conocimiento previo se desarrolló la misión encabezada por Lord Edward Shackleton, encargada por el Gobierno británico a fines de 1975 y realizada con asistencia técnica del *Economist Intelligence Unit*. Su objeto era considerablemente más amplio que el estudio geológico de Griffiths: debía evaluar integralmente las condiciones económicas de las islas y sus posibilidades futuras de desarrollo. El resultado, publicado en julio de 1976 como *Economic Survey of the Falkland Islands*, examinó agricultura, lana, pesca, recursos marinos, infraestructura, comunicaciones, turismo e hidrocarburos. Shackleton no partió de cero: su informe citó expresamente el trabajo de Griffiths, Barker, Burrell y Simpson, incorporó información geofísica adicional y consideró evaluaciones posteriores como la del geólogo Sir Peter Kent, antiguo geólogo jefe de *British Petroleum*. Puede observarse así una secuencia Griffiths–Kent–Shackleton: primero se identificaron las posibilidades geológicas del subsuelo; luego se profundizó su evaluación; finalmente, esas perspectivas fueron incorporadas a un diagnóstico general sobre el potencial económico de las islas y de los espacios marítimos circundantes.

Estos antecedentes no permiten afirmar que el Conflicto Bélico del Atlántico Sur de 1982 haya sido simplemente una “guerra por el petróleo”

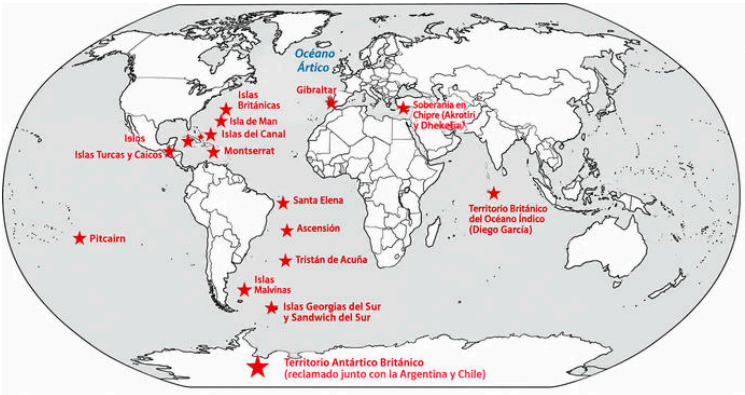
Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

o por los recursos pesqueros. No existe documentación suficiente para establecer semejante causalidad directa, y hacerlo reduciría nuevamente un proceso complejo a una explicación monocausal. Lo que sí puede sostenerse documentalmente es que, varios años antes del conflicto, el Gobierno británico conocía la existencia de cuencas sedimentarias con perspectivas hidrocarburíferas, había encargado estudios específicos, conocía el interés empresarial por explorar la región y había comenzado a evaluar sistemáticamente el potencial pesquero, marítimo y económico del archipiélago; simultáneamente, la Argentina había advertido que no reconocería derechos británicos de exploración o explotación derivados de una soberanía que impugnaba. Por ello, Griffiths y Shackleton deben incorporarse entre los antecedentes de la creciente valorización económica y estratégica del Atlántico Sudoccidental: no explican por sí solos el conflicto bélico, pero muestran que, durante la década anterior a 1982, la disputa había dejado de referirse únicamente a la superficie terrestre de las islas para proyectarse crecientemente sobre el mar, la plataforma continental y sus recursos.

La mencionada interpretación de Mariano César Bartolomé permite ampliar el análisis de las causas del Conflicto Bélico del Atlántico Sur más allá de la crisis interna de la Junta Militar. En *El Conflicto del Atlántico Sur: la hipótesis de una guerra fabricada*, Bartolomé distingue expresamente entre causas endógenas —las vinculadas con la situación política, económica y social argentina— y causas exógenas, cuya génesis debe buscarse en el sistema internacional. Su argumento parte de una constatación geográfica: Malvinas no puede estudiarse como un archipiélago aislado, sino como parte de un dispositivo mucho mayor formado por el Atlántico Sur, el pasaje de Drake, el estrecho de Magallanes, el cabo de Hornos, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur, la ruta del Cabo de Buena Esperanza y la proyección hacia la Antártida. Para las potencias marítimas occidentales, este espacio tenía importancia por sus líneas de comunicación marítima (LCM), esenciales para conectar Europa y América del Norte con África austral, el Índico, el Golfo Pérsico y los mercados y materias primas del hemisferio sur. Bartolomé subraya una anomalía estratégica: mientras la OTAN tenía fijado convencionalmente su límite operativo meridional en el Trópico de Cáncer, los intereses económicos y marítimos de sus integrantes se

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

extendían mucho más al sur. A ello se agregaba la terminación, en 1975, de los acuerdos navales de Simonstown entre el Reino Unido y Sudáfrica, que habían facilitado la cooperación para la seguridad de la ruta del Cabo. En esta lectura, Malvinas, Georgias y el arco insular británico — Ascensión, Santa Elena y Tristán da Cunha — adquirían importancia como puntos de apoyo potenciales sobre un océano cuya seguridad excedía ampliamente la disputa argentino-británica. Éste es el núcleo de la causalidad exógena planteada por Bartolomé: el conflicto se produjo en un espacio que la competencia mundial estaba revalorizando, aunque ello no demuestre por sí solo que las potencias occidentales hubieran decidido provocar una guerra.



Esa reconsideración debe ubicarse en la llamada "segunda Guerra Fría", abierta a fines de los años setenta. La intervención soviética en Afganistán en diciembre de 1979, la revolución iraní y la crisis de los rehenes, la preocupación occidental por el abastecimiento petrolero, el incremento de la actividad naval soviética y la llegada de Ronald Reagan a la presidencia estadounidense en enero de 1981 endurecieron nuevamente la competencia entre bloques. La URSS había desarrollado desde la década de 1960 una marina oceánica capaz de operar lejos de sus bases y mantenía presencia pesquera, científica y de inteligencia en distintos espacios del Atlántico Sur; simultáneamente, Moscú poseía intereses antárticos propios y bases científicas permanentes en el continente blanco. El temor estadounidense no consistía necesariamente en que la Unión Soviética fuese a conquistar militarmente el Atlántico

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

Sur, sino en que una crisis entre aliados occidentales y países latinoamericanos abriese oportunidades políticas, diplomáticas, militares y logísticas para Moscú. Los documentos desclasificados de la administración Reagan son particularmente explícitos: una estimación especial de inteligencia del 9 de abril de 1982 consideraba improbable una intervención militar soviética directa, pero estimaba posible que Moscú proporcionara secretamente información sobre los movimientos británicos; dos días después, documentos preparados para Alexander Haig advertían que la URSS podía aprovechar la ruptura entre Washington y Buenos Aires para convertirse en proveedor de armas y obtener una posición en el Cono Sur. El 27 de abril, la planificación estadounidense incluyó expresamente entre sus objetivos impedir que la Unión Soviética utilizara la crisis para desempeñar un papel político o militar directo. La Guerra Fría, por tanto, no constituye una reconstrucción retrospectiva: aparece escrita en los propios documentos estratégicos estadounidenses de abril de 1982.

Dentro de esa arquitectura debe incorporarse también la Antártida, aunque evitando convertir una interpretación geopolítica en causalidad demostrada. Malvinas, y las restantes islas se encuentran sobre una cadena de posiciones que aproxima el Atlántico Sur al arco de Scotia, el pasaje de Drake y la península Antártica; Argentina, Chile y el Reino Unido mantenían —y mantienen— reclamaciones antárticas parcialmente superpuestas, mientras el Tratado Antártico de 1959, vigente desde 1961, había congelado jurídicamente la controversia sin extinguir las reclamaciones. Desde esta perspectiva puede comprenderse la expresión utilizada por algunos autores de “primera batalla por la Antártida” para interpretar el conflicto de 1982.

La posición de Estados Unidos introduce otra pieza decisiva. La Junta argentina cometió un grave error al interpretar la afinidad anticomunista con la administración Reagan como una asociación estratégica capaz de neutralizar la alianza angloestadounidense. La dictadura argentina participaba activamente en la lucha contrainsurgente centroamericana y Galtieri había desarrollado una relación favorable con sectores de Washington; pero Estados Unidos tenía simultáneamente dos sistemas de intereses de distinta jerarquía: una política hemisférica que necesitaba cooperación latinoamericana y una alianza atlántica en la que

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

el Reino Unido era un socio nuclear, militar y de inteligencia fundamental. La documentación estadounidense demuestra la tensión entre ambos planos. Inicialmente Alexander Haig intentó mediar, mientras dentro de la administración existían posiciones diferentes —con Jeane Kirkpatrick particularmente preocupada por las consecuencias hemisféricas y Caspar Weinberger claramente inclinado hacia Londres—. Pero cuando la mediación fracasó, la prioridad estratégica quedó expuesta: un memorándum del 27 de abril afirmaba que una derrota británica dañaría gravemente la cohesión política y la eficacia militar de la alianza occidental y sostenía que, si comenzaban las hostilidades, interesaba a Washington facilitar una victoria británica rápida. El 30 de abril, Estados Unidos anunció públicamente su apoyo a Londres y posteriormente proporcionó inteligencia, comunicaciones, combustible, armamento y apoyo logístico. La Argentina había confundido, así, una cooperación anticomunista coyuntural con la estructura profunda de la alianza occidental.

Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet completaba el complejo tablero del Cono Sur. Argentina y Chile habían estado al borde de la guerra en diciembre de 1978 por el conflicto del Beagle, evitada mediante la mediación papal, y en 1982 la controversia todavía no había alcanzado su solución definitiva. Para Santiago, una victoria militar argentina podía alterar desfavorablemente el equilibrio regional; para Buenos Aires, en cambio, la persistencia del frente chileno obligaba a mantener fuerzas importantes sobre la cordillera y en la Patagonia, reduciendo los medios disponibles para el Atlántico Sur. Durante el conflicto, el gobierno de Pinochet colaboró secretamente con el Reino Unido mediante intercambio de información y facilidades que favorecieron la vigilancia de los movimientos argentinos; al mismo tiempo, las autoridades argentinas debieron mantener una parte sustancial de sus mejores unidades terrestres frente a Chile. Los documentos estadounidenses permiten comprobar que Washington observaba cuidadosamente esta dimensión: Haig advirtió en abril que una prolongación del conflicto podía desencadenar nuevas tensiones en el canal Beagle, y documentos del Consejo de Seguridad Nacional registraron posteriormente que, mientras aumentaba el respaldo sudamericano a la Argentina, Chile constituía la principal excepción. La

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

paradoja geopolítica era aún mayor: dos dictaduras sudamericanas profundamente anticomunistas permanecían enfrentadas por una disputa territorial, mientras Estados Unidos terminaba respaldando a su aliado británico de la OTAN. A su vez, el anticomunismo argentino era marcadamente pragmático: la Junta mantuvo una importante relación comercial con la URSS, se negó a acompañar el embargo cerealero impulsado por Washington tras la invasión soviética de Afganistán y convirtió al mercado soviético en uno de los principales destinos de los granos argentinos. La Guerra Fría, por tanto, no determinaba mecánicamente las alianzas: ideología, comercio, disputas territoriales e intereses estratégicos podían operar en direcciones diferentes.

Es dentro de esta acumulación de factores donde debe evaluarse la provocadora tesis de Bartolomé sobre una "guerra fabricada". La hipótesis reúne una serie de indicios: creciente preocupación occidental por las rutas del Atlántico Sur; finalización de Simonstown; expansión oceánica soviética; importancia de los accesos al Índico y a la Antártida; revisión naval británica de John Nott; proyectado retiro del HMS Endurance, interpretado en Buenos Aires como signo de desinterés británico; cooperación anticomunista entre Galtieri y Washington; conflicto argentino-chileno; crisis de Georgias del Sur; y, finalmente, la extraordinaria militarización británica del archipiélago después de la guerra, cuyo símbolo sería la construcción de Mount Pleasant. La concatenación permite preguntar si determinadas señales occidentales contribuyeron a que la Junta creyera que una recuperación limitada sería tolerada o rápidamente sometida a negociación.

El estudio de las causas permite así superar dos relatos extremos. La guerra no fue simplemente el producto de un impulso irracional ocurrido el 2 de abril. Existieron antecedentes históricos, negociaciones, intereses estratégicos, señales internacionales y una crisis en Georgias. Pero tampoco existe evidencia suficiente para eliminar la responsabilidad argentina atribuyendo toda la secuencia a una conspiración exterior. La conducción de la Junta tomó decisiones concretas y asumió riesgos cuya magnitud no había calculado adecuadamente.

Para el aula, esta discusión ofrece una oportunidad particularmente fértil. Puede pedirse a los estudiantes que construyan cuatro columnas: Buenos Aires, Londres, Washington y Naciones Unidas, y que

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

reconstruyan qué sabía, qué esperaba y qué decidió cada actor entre febrero y abril. De ese modo, la pregunta deja de ser simplemente "¿por qué empezó el conflicto?" y se transforma en una cuestión históricamente más productiva: ¿cómo pudieron diferentes decisiones racionalizadas por sus protagonistas producir conjuntamente un resultado que algunos de ellos no esperaban?.

II. Comprender y enseñar el Conflicto del Atlántico Sur de 1982

Enseñar el Conflicto del Atlántico Sur de 1982 exige algo más complejo que reconstruir cronológicamente una sucesión de combates. Para comprender un desarrollo bélico es necesario preguntarse quiénes son los actores que participan, cuáles son sus objetivos políticos, qué medios militares poseen, cómo organizan sus fuerzas, qué territorio deben defender o conquistar, cuáles son sus posibilidades logísticas, qué alianzas internacionales los respaldan, qué reglas jurídicas limitan el empleo de la fuerza y de qué manera cada contendiente intenta transformar sus recursos disponibles en una ventaja estratégica. Solamente después de establecer ese marco resulta posible comprender adecuadamente episodios como el hundimiento del ARA General Belgrano, los ataques sobre el HMS Sheffield y el Atlantic Conveyor, el desembarco británico en San Carlos, las batallas de Pradera del Ganso, Monte Longdon o Tumbledown y el cese de las operaciones del 14 de junio.

Esta perspectiva obliga a introducir tres niveles elementales del análisis militar. La estrategia relaciona los objetivos políticos con los medios disponibles para alcanzarlos; el nivel operacional organiza campañas y grandes operaciones destinadas a cumplir aquellos objetivos; y la táctica corresponde al empleo concreto de las fuerzas en el combate. La distinción es fundamental para comprender 1982 porque una unidad puede combatir eficazmente dentro de una estrategia deficiente, del mismo modo que una acción tácticamente exitosa puede no producir consecuencias estratégicas decisivas. El hundimiento o daño de un buque constituye un resultado táctico; impedir un desembarco es un objetivo operacional; obligar al adversario a abandonar la campaña constituye un efecto estratégico. Confundir esos planos impide comprender la dimensión real del conflicto.

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

El Informe elaborado por la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégico-Militares en el Conflicto del Atlántico Sur (CAERCAS), constituye una fuente central para estudiar las deficiencias de la conducción argentina durante el conflicto de 1982. Sus conclusiones y la documentación y testimonios reunidos por la Comisión permiten examinar críticamente problemas de planeamiento, inteligencia, logística, conducción, coordinación interfuerzas y acción militar conjunta, así como distinguir los diferentes niveles en los que fueron adoptadas las decisiones. Su utilización pedagógica, sin embargo, exige evitar una extrapolación de las responsabilidades atribuidas a las conducciones política y estratégico-militar hacia la totalidad de quienes participaron en la guerra.

Los testimonios de oficiales, suboficiales, soldados conscriptos, aviadores, marinos y demás veteranos permiten, a su vez, reconstruir la experiencia concreta del combate y advertir que el conflicto no puede explicarse exclusivamente a partir de los errores de su conducción superior. Un piloto que ejecutó una misión, un artillero que sostuvo una posición, un tripulante que operó en el mar o un conscripto que combatió en tierra actuaron dentro de estructuras jerárquicas y operacionales que no habían diseñado. Distinguir entre decisión política, conducción estratégica, conducción operacional, mando táctico y actuación individual del combatiente resulta, por ello, indispensable para enseñar el conflicto con rigor histórico y evitar que las deficiencias documentadas por la CAERCAS se conviertan, por generalización, en una caracterización simplificadora del desempeño argentino en la guerra.

La geografía explica una parte sustancial del conflicto. Malvinas fue una guerra insular y aeronaval antes de convertirse plenamente en una campaña terrestre, y esa condición hizo del mar y del aire simultáneamente espacios de combate y vías indispensables de abastecimiento. La Argentina poseía la enorme ventaja de la proximidad continental, pero esa cercanía no eliminaba la necesidad de transportar hombres, municiones, alimentos, combustible, repuestos y equipos a través de centenares de kilómetros de mar o espacio aéreo. El Reino Unido afrontaba el problema inverso: debía proyectar y sostener una fuerza expedicionaria a aproximadamente 8.000 millas de las islas británicas. Sin embargo, esa distancia debe analizarse conjuntamente

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

con una diferencia decisiva de capacidades: la Royal Navy estaba estructurada para operaciones oceánicas de gran alcance y disponía de experiencia, medios navales, auxiliares y procedimientos logísticos capaces de sostener una fuerza lejos del territorio metropolitano. La propia documentación británica reconocería posteriormente que una operación de "recuperación" de las islas planteaba un problema logístico formidable, pero también que existían desde años anteriores evaluaciones militares acerca de las fuerzas que serían necesarias frente a una eventual recuperación argentina.

Por ello, tampoco resulta exacto presentar la reacción naval británica como una improvisación iniciada exclusivamente después del 2 de abril de 1982. La secuencia temporal es particularmente significativa. El 26 de marzo, en el contexto de la crisis de Georgias del Sur, Margaret Thatcher recibió una nueva evaluación de los Chiefs of Staff sobre las capacidades necesarias para responder a una eventual acción argentina. El 29 de marzo, cuatro días antes de la recuperación argentina de las Malvinas, el gobierno británico decidió despachar hacia el Atlántico Sur un submarino de propulsión nuclear. El 31 de marzo, cuando Londres recibió información de inteligencia que indicaba la inminencia de la operación argentina, dispuso además que siete buques que se encontraban participando de ejercicios en el área de Gibraltar comenzaran a desplazarse y ordenó acelerar los preparativos para constituir una fuerza expedicionaria de mayores dimensiones. La propia Thatcher explicó posteriormente ante el Parlamento que aquellos siete buques no debían operar aisladamente, sino esperar a la fuerza organizada alrededor de los portaaviones. De este modo, cuando se produjo la operación argentina del 2 de abril, el dispositivo británico no partió de cero: existían estudios de contingencia, unidades disponibles, movimientos navales ya iniciados y una estructura naval susceptible de ser movilizada con rapidez.

La decisión política de organizar la gran expedición se consolidó inmediatamente después de la recuperación argentina. El 5 de abril comenzaron a zarpar desde Portsmouth los principales componentes de la fuerza, encabezados por los portaaviones HMS Hermes y HMS Invincible; otras unidades se incorporaron progresivamente, mientras se requisaban y adaptaban buques mercantes para transportar tropas, helicópteros, combustible, municiones y abastecimientos. La magnitud

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

final permite comprender que no se trató simplemente de enviar algunos buques de guerra: según la cifra utilizada por la Royal Air Force, la fuerza británica llegó a comprender 127 buques: 43 de la Royal Navy, 22 de la Royal Fleet Auxiliary y 62 mercantes, estos últimos incorporados para cubrir necesidades que la flota militar por sí sola no podía satisfacer. La movilización de buques civiles —entre ellos grandes transportes— fue, por consiguiente, una pieza estructural de Operation Corporate y demuestra hasta qué punto la campaña fue también una gigantesca operación logística.

Aquí vemos como la logística debe ocupar, por ello, un lugar central en el aula. Una fuerza armada no combate solamente con hombres y sistemas de armas: necesita municiones, combustible, alimentos, abrigo, repuestos, comunicaciones, transporte, inteligencia, atención sanitaria, mantenimiento y capacidad de evacuación. Tampoco alcanza con que esos recursos existan en algún punto del teatro de operaciones: deben recorrer una cadena logística completa, desde su obtención y transporte estratégico hasta su almacenamiento, redistribución y llegada efectiva a cada unidad.

La campaña aeronaval constituye uno de los puntos en los que con mayor claridad puede observarse la distancia entre la imagen posterior de una derrota inevitable y el desarrollo efectivo de las operaciones. La Fuerza Aérea Argentina y la Aviación Naval consiguieron colocar a la Task Force ante una amenaza que condicionó su despliegue, sus sistemas defensivos y la protección de sus unidades principales. Los hundimientos del HMS Sheffield, HMS Ardent, HMS Antelope, HMS Coventry y Atlantic Conveyor, junto con los daños sufridos por otras unidades, fueron resultados militares concretos y obligaron al mando británico a administrar cuidadosamente recursos que no podía reemplazar con facilidad en el Atlántico Sur. Sin embargo, la capacidad argentina para producir pérdidas no alcanzó a quebrar el dispositivo enemigo: los portaaviones continuaron operativos, la fuerza anfibia consiguió desembarcar y la cabeza de playa establecida en San Carlos el 21 de mayo pudo sostenerse y expandirse. La cuestión central para el docente no consiste, entonces, en contraponer “éxito” y “fracaso”, sino en mostrar cómo una serie de acciones tácticamente eficaces puede resultar insuficiente cuando no logra modificar el curso operacional de la

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

campaña. Ésa fue una de las claves de 1982: la Argentina demostró capacidad para golpear seriamente a la fuerza británica, pero no consiguió impedir que ésta preservara los medios indispensables para continuar combatiendo.

Cuando el centro de gravedad de las operaciones se trasladó progresivamente hacia la guerra terrestre, la diversidad de experiencias se hizo todavía más evidente. Pradera del Ganso, Monte Longdon, Dos Hermanas, Monte Harriet, Tumbledown y Wireless Ridge no pueden ser reunidos bajo una única descripción del comportamiento argentino: intervinieron unidades diferentes, con grados distintos de instrucción, cohesión, conducción y abastecimiento, enfrentadas además a situaciones tácticas particulares. Hubo posiciones que fueron quebradas con mayor rapidez y otras en las que se combatió intensamente, incluso a corta distancia y durante horas. Las deficiencias no deben ser relativizados; pero tampoco pueden convertirse en una explicación total de la experiencia. Los jóvenes argentino eran soldados: patrullaron, defendieron posiciones, operaron morteros y ametralladoras, sirvieron artillería, transportaron munición, mantuvieron comunicaciones, atendieron heridos y combatieron.

La valoración realizada por los propios británicos permite apreciar esa complejidad desde una fuente particularmente significativa. Julian Thompson, comandante de la 3.ª Brigada de Comandos, denominó *No Picnic* a su reconstrucción de la campaña, una elección que por sí misma remite a la dificultad de una operación desarrollada a enorme distancia y frente a un adversario capaz de combatir y producir bajas. Las memorias y testimonios británicos tampoco ofrecen una valoración uniforme de las fuerzas argentinas: señalan dificultades, reconocen la peligrosidad de la aviación, la intensidad del fuego de artillería y la resistencia encontrada en determinados combates terrestres. Esta mirada posee un valor didáctico particular porque impide confundir el conocimiento posterior del enemigo con las deficiencias estratégicas e incertidumbre experimentada por quienes estaban combatiendo. Los británicos no actuaron como si la victoria les perteneciera de antemano: debieron preservar sus portaaviones, proteger sus transportes, soportar pérdidas navales, asegurar San Carlos y conquistar sucesivamente las posiciones que protegían Puerto Argentino.

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

Esta perspectiva permite reconsiderar también la dimensión humana, patriótica y nacional de la experiencia argentina en 1982. La condición de conscripto no anulaba la capacidad del soldado para comprender, interpretar y otorgar sentido a aquello que estaba viviendo: para muchos soldados, suboficiales y oficiales, combatir en Malvinas significó defender un territorio que reconocían como parte integrante de la Nación, una convicción construida mucho antes de la guerra a través de la escuela, la memoria colectiva y una reivindicación histórica sostenida por el pueblo argentino; para otros, pudieron adquirir mayor peso el deber militar, la solidaridad con los compañeros, el miedo, las condiciones concretas del combate o la necesidad de sobrevivir, dimensiones que además podían coexistir y transformarse durante la campaña. Distinguir estas experiencias resulta indispensable para no trasladar automáticamente el juicio sobre las decisiones erróneas de los mandos estratégicos: la reivindicación argentina de soberanía precedía largamente a la Dictadura, de modo que un combatiente podía cuestionar la conducción política o militar y, simultáneamente, comprender su actuación como defensa de una causa nacional.

Desde esta perspectiva, también merece revisarse la fórmula según la cual los argentinos habrían sido simplemente "mandados a morir". Aplicada indiscriminadamente, esa expresión confunde una crítica legítima a decisiones de la conducción con una interpretación retrospectiva de toda la experiencia militar. Si la muerte hubiese sido el único horizonte posible desde el comienzo, resultaría difícil explicar por qué la fuerza expedicionaria británica necesitó desplegar semejante esfuerzo material para obtener la victoria, por qué sufrió pérdidas navales importantes, por qué debió adaptar procedimientos frente a los ataques argentinos o por qué sus propios veteranos conservaron el recuerdo de determinados combates como enfrentamientos particularmente exigentes.

Reconocer el valor de los combatientes argentinos no exige idealizar la conducción ni borrar las profundas desigualdades que existieron entre unidades, armas y mandos. Hubo oficiales, suboficiales y soldados que estuvieron a la altura de circunstancias extremas y otros cuya actuación fue deficiente; hubo unidades eficazmente conducidas y otras afectadas por errores de planeamiento, improvisación, insuficiente preparación

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

para el ambiente, fallas de coordinación y graves carencias logísticas. Precisamente por eso, el análisis histórico debe distinguir responsabilidades y desempeños antes que proyectar sobre todos los combatientes las deficiencias de la conducción superior. En numerosas posiciones, además, esas limitaciones fueron enfrentadas mediante ingenio, adaptación, solidaridad y coraje personal: hombres que sostuvieron posiciones bajo fuego naval y terrestre, artilleros que continuaron operando sus piezas, aviadores que penetraron defensas navales técnicamente superiores, tripulaciones que cumplieron sus misiones en condiciones extraordinariamente adversas y soldados que permanecieron junto a sus compañeros aun cuando el desarrollo general de la campaña se había tornado desfavorable. Esa dimensión pertenece también a una tradición militar y cultural argentina que atribuyó históricamente un lugar central al coraje, el sacrificio y el cumplimiento del deber, y no desaparece porque el resultado estratégico haya sido una derrota.

El cese al fuego, por consiguiente, no debe absorber retrospectivamente el significado completo de 1982 ni transformar a sus protagonistas en simples figurantes de un desenlace inevitable. La propia conducta del mayor general británico Jeremy Moore, comandante de las fuerzas terrestres británicas que recibió la el acta el 14 de junio, ofrece un dato significativo: comprendió la importancia del honor militar del adversario y decidió retirar del instrumento la expresión “rendición incondicional”, pese a las instrucciones recibidas desde Londres, porque consideró que aquella fórmula podía resultar ofensiva para el sentido del honor argentino y dificultar el acuerdo. Gran Bretaña consiguió conservar por muy poco sus capacidades esenciales y alcanzar finalmente una situación operacional favorable. Pero esa constatación no disminuye el valor, la inventiva, el sacrificio y la capacidad de combate demostrados por numerosos argentinos. Los 649 muertos, los heridos y quienes regresaron de las islas pertenecen a la historia de un conflicto efectivamente combatido: ponderar su coraje sin ocultar errores estratégicos, responsabilidades ni sufrimientos constituye una forma de recuperar la complejidad histórica de Malvinas y de evitar que la crítica necesaria de parte de la conducción termine convirtiéndose en una degradación indiscriminada de quienes combatieron.

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

III. La posguerra: desmalvinización, veteranos, memoria y soberanía

El 14 de junio de 1982 concluyeron las principales operaciones militares en las Malvinas, pero no terminó la Cuestión Malvinas. Esta distinción resulta indispensable para comprender la posguerra. La situación significó la pérdida de las posiciones argentinas en el archipiélago y el restablecimiento del control británico, pero no produjo una decisión internacional que adjudicara la soberanía ni eliminó la controversia reconocida por las Naciones Unidas. Apenas cinco meses después, el 4 de noviembre de 1982, la Asamblea General aprobó la Resolución 37/9, que volvió a reclamar una solución pacífica y negociada. La posguerra debe ser entendida, por ello, como el comienzo de una nueva etapa de la controversia: el Reino Unido procuró transformar una posición estratégica más sólida, mientras la Argentina debió redefinir los instrumentos mediante los cuales continuaría sosteniendo su reivindicación. El conflicto había terminado; la disputa de soberanía permanecía abierta, y esa diferencia entre el resultado militar y cuestión territorial pendiente constituye una de las primeras nociones que deben quedar claras en el aula.

Dentro de esa primera posguerra adquirió importancia aquello que posteriormente se denominó desmalvinización. El concepto nos permite estudiar un conjunto de discursos, representaciones y prácticas mediante los cuales la condena de la dictadura tendió, en determinados ámbitos, a extenderse sobre la guerra, la reivindicación territorial e incluso sobre quienes habían combatido. En marzo de 1983, la conocida entrevista de Osvaldo Soriano a Alain Rouquié convirtió el término “desmalvinizar” en una referencia del debate político de la transición: la preocupación consistía en impedir que las Fuerzas Armadas pudieran utilizar nuevamente Malvinas como fuente de legitimación. Ese problema era comprensible en una Argentina que salía del terrorismo de Estado; otra cuestión diferente era que la necesaria desmilitarización de la política terminara convirtiéndose culturalmente en desmalvinización de una causa nacional anterior a la dictadura, o que la crítica de la conducción se trasladara indiscriminadamente hacia los combatientes.

Los propios veteranos de guerra fueron actores fundamentales en la resistencia a esa reducción. Como muestra el material trabajado para este cuaderno, las organizaciones comenzaron a constituirse muy

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

tempranamente: el 26 de agosto de 1982, apenas dos meses después del final de los combates, se conformó en Almagro uno de los primeros espacios organizativos de ex soldados combatientes. Desde allí y desde los numerosos centros que fueron surgiendo en el país, los veteranos construyeron redes de solidaridad, reclamaron asistencia sanitaria, trabajo, vivienda, pensiones y reconocimiento público, pero sus demandas no se agotaron en una agenda asistencial. Una parte importante del movimiento sostuvo que su experiencia debía inscribirse dentro de la reivindicación argentina de soberanía y no quedar reducida a la condición de víctimas de la dictadura. Las consignas, actos, publicaciones, movilizaciones y centros contribuyeron así a conservar una memoria de Malvinas cuando el lenguaje público encontraba dificultades para integrar guerra, democracia y soberanía. Los veteranos no esperaron pasivamente que el Estado construyera una política de memoria: intervinieron en su construcción, disputaron sus significados y obligaron progresivamente a las instituciones democráticas

La expansión de los Centros de Ex Combatientes y Centros de Veteranos de Guerra por todo el territorio nacional convirtió esa primera organización en un verdadero movimiento asociativo. Su importancia puede observarse todavía en la extensa red de instituciones reconocidas en las distintas provincias. En Santa Fe, por ejemplo, existen centros en Rosario, Santa Fe, San Lorenzo y Reconquista, entre otras localidades; la nómina oficial incluye al Centro de Ex-Soldados Combatientes de Rosario y al Centro de Veteranos de Guerra “Combate de San Lorenzo”, mostrando que la memoria de Malvinas adquirió una implantación territorial que excedió ampliamente a Buenos Aires. También se constituyeron federaciones y organizaciones de alcance nacional, provincial y local, con diferencias internas acerca de la guerra, la condición de veterano, las políticas estatales y la memoria de 1982. Esa diversidad debe ser respetada: no existió una única “voz del veterano”. Pero precisamente esa pluralidad demuestra que los ex soldados combatientes no desaparecieron del espacio público. Sus centros se convirtieron simultáneamente en lugares de encuentro, asistencia, transmisión testimonial, acción política, educación y preservación de la memoria, y constituyeron una de las respuestas sociales más persistentes frente a cualquier intento de relegar Malvinas al pasado.

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

A esa acción se sumó la de los familiares de los caídos, para quienes la posguerra estuvo atravesada por el duelo, la identificación de los muertos, la relación con el cementerio de Darwin y la preservación de una memoria vinculada estrechamente con la soberanía. Veteranos y familiares no conformaron un universo homogéneo y mantuvieron posiciones diferentes frente a numerosos problemas, pero contribuyeron decisivamente a impedir que los 649 argentinos muertos fueran absorbidos por una narrativa que explicara 1982 únicamente como una aventura de la dictadura. Los viajes, ceremonias, monumentos, placas, vigilias, museos y conmemoraciones fueron construyendo una geografía nacional de la memoria que alcanzó ciudades, pueblos, escuelas y asociaciones civiles. De esta manera, la memoria de Malvinas dejó de depender exclusivamente del Estado. Se territorializó socialmente: pasó a vivir en centros de veteranos, asociaciones de familiares, monumentos, nombres de calles, establecimientos educativos y actos comunitarios. Esa apropiación desde abajo explica en buena medida por qué la Cuestión Malvinas consiguió atravesar el cambio de generaciones y recuperar progresivamente una presencia pública que excedió ampliamente el recuerdo de la guerra.

Uno de los efectos más persistentes de ciertas concepciones desmalvinizadoras fue la progresiva reducción del combatiente argentino a la figura de “los chicos de la guerra”. El conscripto comenzó entonces a aparecer exclusivamente como un adolescente inerme, privado de voluntad y conducido pasivamente hacia una derrota inevitable. Esa lectura, aunque permitía denunciar responsabilidades reales, podía terminar suprimiendo la condición histórica del soldado como combatiente. Los testimonios de los propios veteranos muestran una realidad considerablemente más compleja: aquellos jóvenes ocuparon posiciones, patrullaron, operaron armas, sirvieron piezas de artillería, transportaron munición, mantuvieron comunicaciones, evacuaron heridos y enfrentaron al adversario. Reconocerlo no significa desconocer padecimientos ni denuncias, sino evitar una falsa oposición entre víctima y protagonista. Un conscripto podía sufrir privaciones, cuestionar a sus superiores y, simultáneamente, combatir con valor, proteger a sus compañeros y atribuir un sentido patriótico a su presencia en las islas. La crítica no exige despojar de conciencia nacional la causa.

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

Frente a esa representación, los propios Veteranos de Guerra de Malvinas y sus organizaciones desempeñaron un papel decisivo en la reconstrucción de la memoria pública. Los derechos obtenidos durante la democracia no surgieron como una concesión espontánea del Estado: fueron precedidos por años de organización, movilización y reclamo de los excombatientes, sus centros, federaciones y familiares. La Ley 23.109 de 1984 constituyó uno de los primeros reconocimientos normativos y posteriormente se ampliaron pensiones, prestaciones sanitarias, derechos sociales y formas institucionales de conmemoración, hasta consolidarse el 2 de abril como Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Pero la trascendencia histórica de los Centros de VGM excede ampliamente la cuestión asistencial: fueron espacios de sociabilidad, contención, transmisión testimonial y preservación de una memoria que vinculó la experiencia de 1982 con la continuidad de la reivindicación soberana. Sus museos, archivos, ceremonias, vigilias, charlas escolares y actividades comunitarias impidieron que la guerra quedara confinada al recuerdo de una derrota.

La transición democrática enfrentó una dificultad que ciertas concepciones desmalvinizadoras no siempre consiguieron resolver: separar a las Fuerzas Armadas del terrorismo de Estado sin separar, al mismo tiempo, defensa nacional, Fuerzas Armadas, pueblo y soberanía. La subordinación militar al poder constitucional era una condición indispensable de la democracia; otra cuestión fue el proceso posterior de reducción de capacidades, pérdida de presupuesto, desarticulación industrial y distanciamiento cultural respecto de la defensa, mientras el Reino Unido seguía un camino inverso en el Atlántico Sur, fortaleciendo su guarnición, construyendo Mount Pleasant y consolidando su aprovechamiento económico de los espacios disputados.

La misma tensión adquirió una dimensión especialmente crítica cuando se observa conjuntamente la normalización diplomática, las restricciones que pesaron sobre las capacidades militares argentinas y el tratamiento de las conductas británicas durante la guerra. En este sentido es necesario analizar el hundimiento del ARA General Belgrano y denuncias relativas a la muerte de combatientes argentinos *hors de combat*, ejecuciones o malos tratos atribuidos a efectivos británicos. Esa ausencia de determinaciones judiciales no obliga, sin embargo, a excluirlas de la

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

enseñanza ni a reproducir una memoria unilateral de la guerra. Sobre ese trasfondo se firmaron las Declaraciones de Madrid de 1989 y 1990: la fórmula de salvaguardia preservó formalmente las posiciones de soberanía, pero Madrid II restableció las relaciones diplomáticas y estableció mecanismos de confianza, información y comunicación militar. Para una corriente crítica argentina, esos entendimientos representaron una suerte de "rendición estratégica" de la posguerra; la expresión pertenece a esa interpretación y no al contenido jurídico de los acuerdos. Lo históricamente verificable es la asimetría: mientras Gran Bretaña consolidaba militarmente su posición en las islas, la Argentina aceptaba un marco de normalización sin que se hubiera reabierto la negociación sustantiva sobre soberanía.

Esa asimetría se profundizó cuando la normalización exterior coincidió con una transformación estructural del aparato productivo argentino vinculado con la defensa. El Decreto 1398/1990 declaró sujetas a privatización numerosas empresas y establecimientos dependientes del Ministerio de Defensa, entre ellos Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE), el Astillero Ministro Manuel Domecq García, SOMISA, el Tanque Argentino Mediano (TAMSE), fábricas militares y establecimientos vinculados con tecnología aeroespacial, armamentos, explosivos y producción industrial estratégica; la Ley 24.045 de 1991 aprobó legislativamente ese proceso, que posteriormente alcanzó privatizaciones, liquidaciones y reorganizaciones concretas.

Paralelamente, el vínculo económico con el antiguo adversario recibió una protección jurídica específica: la Ley 24.184, sancionada en 1992, aprobó el convenio argentino-británico firmado en Londres el 11 de diciembre de 1990 para promover y proteger recíprocamente las inversiones, cuyo texto declaraba expresamente el propósito de crear condiciones favorables para el aumento de las inversiones de un Estado en el territorio del otro. La crítica a la posguerra puede formularse entonces sin necesidad de simplificaciones: en pocos años la Argentina transitó desde el conflicto con el Reino Unido hacia un sistema de confianza militar y normalización diplomática, protección jurídica de inversiones británicas y privatización o liquidación de componentes relevantes de su propio complejo industrial de defensa, mientras Londres reforzaba su presencia militar, administrativa y económica en el territorio

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

cuya soberanía continuaba disputada. Es precisamente esa secuencia —y no la mera existencia de relaciones diplomáticas— la que permite comprender por qué una parte de la historiografía crítica interpretó los años posteriores a Madrid como una profundización material de la desmalvinización.

IV. Reflexiones para el aula

La desmalvinización constituye una de las claves más fértiles para volver sobre todo lo estudiado, siempre que no se la transforme, a su vez, en una explicación simplificadora. El docente puede comenzar preguntándose qué fue aquello que la sociedad argentina necesitaba revisar después de 1982 y qué cuestiones diferentes terminaron confundiéndose en esa revisión. Era necesario condenar el terrorismo de Estado, investigar las responsabilidades de la conducción política y militar, conocer las deficiencias sufridas por los soldados y subordinar definitivamente las Fuerzas Armadas al orden constitucional; pero ninguna de esas tareas exigía concluir que la reivindicación de soberanía había perdido legitimidad, que todos los mandos habían actuado de igual manera, que los soldados habían sido solamente víctimas o que toda preocupación por la defensa nacional constituía una supervivencia autoritaria. Allí aparece el primer equívoco que conviene trabajar en clase: dictadura, guerra, Fuerzas Armadas, combatientes y Cuestión Malvinas son realidades relacionadas, pero no equivalentes. Pensar la desmalvinización exige, por tanto, estudiar cómo esas diferencias fueron frecuentemente borradas y preguntarse qué consecuencias produjo esa simplificación sobre nuestra manera de recordar Malvinas.

Para trabajar en el aula resulta necesario interrogar uno de los principales equívocos de la desmalvinización: haber convertido determinadas experiencias reales de los combatientes en una explicación total de la guerra. Frío, hambre, miedo, deficiencias logísticas, errores de conducción y denuncias de malos tratos forman parte de 1982 y deben ser estudiados; el problema aparece cuando esas experiencias construyen retrospectivamente a todos los conscriptos como “chicos” indefensos, carentes de voluntad y conducidos pasivamente hacia una derrota inevitable. Esa representación deja fuera una parte igualmente documentable de la guerra: hubo soldados que

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

sostuvieron posiciones, patrullaron, operaron artillería y sistemas antiaéreos, mantuvieron comunicaciones, evacuaron heridos y combatieron; hubo unidades con desempeños diferentes y acciones argentinas que obligaron al adversario británico a sufrir pérdidas y modificar sus operaciones. Por eso el docente puede proponer una pregunta incómoda pero necesaria: ¿por qué reconocer el valor de los combatientes fue confundido tantas veces con justificar a la dictadura? Dictadura, conducción militar, Fuerzas Armadas, combatientes y causa de soberanía son dimensiones relacionadas, pero no equivalentes. Del mismo modo, padecimiento y valor tampoco se excluyen: un conscripto podía sufrir graves privaciones y simultáneamente sentirse comprometido con sus compañeros y con aquello que entendía como una causa nacional. La posterior organización de los VGM en centros y federaciones refuerza esta crítica: aquellos hombres no fueron solamente objetos de decisiones ajenas, sino sujetos que combatieron y que, después del 14 de junio, reclamaron derechos, produjeron memoria y disputaron las representaciones construidas sobre ellos.

Un segundo equívoco para discutir consiste en preguntarse si democratizar debía significar también desmalvinizar y desmilitarizar la concepción argentina de la soberanía. La subordinación de las Fuerzas Armadas al poder constitucional era indispensable después de la dictadura; pero subordinación democrática no equivale a indefensión, del mismo modo que defensa nacional no equivale a militarismo como fin en si mismo. Mientras la Argentina reconstruía su democracia y posteriormente atravesaba un deterioro de capacidades militares e industriales vinculadas con la defensa, el Reino Unido convirtió su victoria en una presencia militar, administrativa y económica reforzada en las islas y el Atlántico Sur. La cuestión permite entonces formular preguntas para la clase antes que ofrecer respuestas prefabricadas: ¿qué diferencia existe entre democratizar las Fuerzas Armadas y prescindir de capacidades de defensa?, ¿qué consecuencias tiene separar al pueblo de la cuestión militar?, ¿por qué 1982 debería determinar la valoración de una controversia que existía antes de la guerra y continuó después de ella?, ¿qué papel desempeñaron los veteranos en impedir esa clausura? La propia democracia argentina ofrece un dato decisivo para discutir esas preguntas: en 1994 incorporó

Plataforma Malvinas Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Agencia de Innovación

constitucionalmente la recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía como objetivo permanente e irrenunciable, conforme al derecho internacional. El desafío pedagógico consiste, entonces, en desarmar falsas equivalencias: dictadura no es Malvinas; soldado no es sinónimo víctima; cese al fuego no significa renuncia a la soberanía; defensa no es autoritarismo; y paz no significa desinterés estratégico. Sobre esas distinciones puede construirse una enseñanza crítica de Malvinas que no oculte responsabilidades, pero tampoco reproduzca los silencios y reducciones de la desmalvinización.

Plataforma Malvinas
Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Agencia de Innovación

